



sociedad

Los lobos merodean cerca de Barcelona



educación

Una competición para apoyar y prestigiar la FP



pantallas

Francia plantea que las televisiones salten las fronteras



La presa de El Atazar, que distribuye al Canal de Isabel II de Madrid. El Gobierno de Aguirre ha planteado la posibilidad de privatizar una parte de su sistema de aguas. / CANAL DE ISABEL II

ciudadanos. Este marco es el que, a su juicio, favorece la convivencia de varios modelos entre los que se incluye la participación de las empresas privadas. “Pero es falso el debate sobre la privatización, porque los activos [bienes y derechos con valor monetario] son siempre públicos”, advierte.

El expresidente de la Expo de Zaragoza y de Aguas Andinas, así como exdirector del Canal de Isabel II, sí defiende que el dinero que se saca del canon, que suelen ser cifras millonarias, “debe ir al agua”. “Si no”, asegura, “se trata de una especie de malversación”.

Gistau defiende la participación de las empresas, aunque asegura que sacan un beneficio “legítimo, pero corto”. “No son hermanas de la caridad”, justifica. Pero aboga por una figura clave que defiendan también los operadores públicos: un regulador que fije unas reglas claras y comunes.

El secretario general de la

“No reinvertir en agua es una especie de malversación”, dice un experto

En países como Holanda el control es totalmente público

asociación de operadores públicos se suma a esta demanda y la exige por ley. “Tiene que haber indicadores claros y públicos que aporten información contrastable”, reclama para garantizar la calidad del servicio y, a su juicio, demostrar la bondad de la gestión de las empresas públicas. Gistau responde que las entidades privadas someten su gestión a la revisión de los mismos indicadores que las empresas públicas.

El negocio existe y es internacional. La multinacional andaluza Abengoa anunció recientemente que se ha hecho, en consorcio con Graña y Montero, con la ampliación y mejora del sistema de agua potable para 200.000 usuarios en Perú. En total, 83 millones de euros.

Aqualia, del grupo FCC, está presente en más de 1.100 municipios de 16 países y presta servicios a 27 millones de personas. Esta empresa cree que su participación aporta a los municipios “capacidad técnica, conocimiento y experiencia”. Defiende que el negocio se genera al “disponer de muchos contratos a muy largo plazo”. “Se crean grandes sinergias que hacen posible una economía de escala de la que se obtiene reducciones de gastos muy importantes en suministros (energía, telefonía, reactivos, etcétera), materiales y repuestos mientras se favorece la innova-

ción y el desarrollo de tecnologías propias, lo que posibilita alcanzar una pequeña rentabilidad estable en el tiempo ajustada a lo planteado en la oferta”.

También rechazan que no se sometan a los mismos controles que las empresas públicas o que su objetivo no incluya al usuario. En este sentido, Aqualia afirma que “el ciudadano es el centro de su gestión” y que se someten a todas las normas y normativas de calidad.

El Gobierno de Esperanza Aguirre ya ha anunciado su intención de privatizar parte del servicio en la Comunidad de Madrid, pero el Ayuntamiento de Huelva ya ha dado el paso. Este es uno de los últimos que ha incorporado a un grupo de empresas privadas al 49% del accionariado. La operación supone un montante total de 57,3 millones de euros. A cambio, Aquagest, el grupo que se ha sumado a la entidad—Unicaja (30%), Caja Granada (15%) y Agbar (55%)—y que ya gestiona el agua de 1,2 millones de personas, se compromete a invertir en la ciudad siete millones de euros en los 25 años del contrato (un millón de euros el primer ejercicio). Además, cuatro millones irán destinados a sensibilización y concienciación ciudadana. La nueva empresa resultante tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un 1% por encima del IPC, pero sólo previa aprobación del pleno municipal y tras justificar los costes.

El objetivo ha sido “optimizar los recursos municipales dando entrada a un socio tecnológico y financiero que refuerce la estructura, garantice la viabilidad de Aguas de Huelva en estos tiempos difíciles y mejore la calidad en la prestación del servicio”, afirma el gobierno local. “Muchos municipios españoles emularán la actuación del Ayuntamiento de Huelva porque la alianza público-privada es, sin duda, el futuro de la gestión de servicios para obtener la calidad que merecen los ciudadanos”, afirma el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP).

En cualquier caso, el debate tiene como fin el usuario, que debe tener siempre la última palabra. El Congreso Nacional de Medio Ambiente celebrado el pasado año advertía de los cambios en los modelos de gestión y clamaba por un principio básico: la participación, incluida en la Directiva Marco del Agua y que permite implicar a la sociedad en la toma de decisiones. En este sentido, el congreso defendió que, sea cual sea el futuro próximo, es necesario “implantar medidas para mejorar el acceso a la información medioambiental relevante y garantizar la participación pública en todo el proceso de planificación del servicio hídrico”.

+ EL PAÍS.COM

Participe

¿Prefiere que la gestión del agua sea pública o privada?

ANNE LE STRAT

Adjunta a la alcaldía de París

“En un año hemos bajado un 8% las tarifas y ganado 35 millones”

R. L., Sevilla

Anne Le Strat es una bretona nacida en 1968 y criada en París que no muestra ninguna duda en sus convicciones. Es tajante cuando responde. Ahora es adjunta al alcalde de París, el socialista Bertrand Delanoë, y es responsable de una de las actuaciones más delicadas de su mandato: el rescate del servicio de agua del que se abastecen 3,5 millones de personas.

Pregunta. ¿Por qué el Ayuntamiento de París rescató el servicio de agua después de 25 años de participación privada?

Respuesta. Principalmente, constatamos que había opacidad financiera, una pérdida de control técnico y de la gobernabilidad del sistema. Nació en el equipo municipal una voluntad de volver a la gestión pública. El alcalde de París lo propuso como argumento político porque consideraba que, dado que el agua es un bien público, tenía que ser gestionado de forma pública. Por lo tanto, había razones políticas y de gestión. Pasamos de tres operadores a uno solo que gestionaba todo el ciclo.

P. ¿Por qué no controló el Ayuntamiento de París a las empresas ante a la opacidad financiera?

R. Es una tarea difícil, pero esto no quita la responsabilidad municipal. Ha habido, poco a poco, una pérdida de compromiso de la comunidad pública sobre el servicio. Es verdad que se dejó solo y sin control. Este examen es difícil cuando no se tiene un dominio operacional del sistema. Los contratos estaban centrados en la distribución y no en el análisis de como se prestaba el servicio. Los datos de gestión englobaban muchos aspectos y, para saber lo que costaba en realidad un servicio, había que entrar en la contabilidad general de una gran empresa.

P. ¿Es eficaz la gestión pública?

R. El modo de gestión pública lleva funcionando desde enero de 2010 y ya hemos conseguido ventajas económicas. Hemos logrado un beneficio anual de 35 millones. Unificar tres operadores nos permite aplicar una economía de escala y todos los beneficios se reinvierten en el sistema, ya que no hay reparto, por lo que se destinan a política social y

al usuario. Hemos conseguido reducir la tarifa en un 8%.

P. ¿Son más eficientes que las empresas privadas?

R. Puedo hablar de la experiencia parisina, no de todos los casos. El servicio público puede estar bien gestionado. Todo el personal que trabajaba para los operadores privados se ha transferido, por lo que no hemos perdido el saber hacer. Nuestra gestión, además, tiene una visión a largo plazo. La lógica de los operadores privados es financiera, buscan aumentar los beneficios. Nosotros buscamos que sea un servicio sostenible, perdurable y con equilibrio financiero. Tenemos la estructura, la gobernabilidad y todos los sistemas para ser



Anne Le Strat.

igual de eficientes. Además, se ha firmado un contrato con los ciudadanos que establece los objetivos y los indicadores de prestaciones, lo que permite y nos obliga a un control y evaluación permanente del servicio.

P. ¿Qué dificultades han encontrado en el rescate?

R. Económicamente, ninguna porque hemos esperado al final del contrato. Las dificultades han sido principalmente jurídicas al unificar estructuras diferentes, así como con la transferencia de personal y compra de bienes. Ninguna de estas dificultades ha sido insalvable.

P. ¿También es presidenta de Aqua Pública. Qué es esta asociación?

R. Somos una red europea de operadores que pretende demostrar que la gestión pública es posible, eficaz y mejor. Pero no sólo por militancia, podemos aportar pruebas de que es así realmente. Es muy importante la gestión pública, pero siempre acompañada del control.